

La explosión interrumpida. Bolivia, al borde la guerra civil

Mariano Martín Schlez (CEICS / UBA / UNLP / CONICET)

marianoschlez@hotmail.com

Desde principios del siglo XXI, Bolivia atraviesa una crisis orgánica que ha devenido en un proceso revolucionario de resultados aún abiertos. En los últimos años, la sociedad boliviana se encuentra convulsionada por enfrentamientos sociales cada vez más agudos, que los diferentes intentos de institucionalización parecen no poder detener. La Asamblea Constituyente intentó canalizar la Agenda de Octubre por vías propias del régimen burgués, sin embargo, no hizo más que agudizar los enfrentamientos y actualizar la cuestión de las autonomías regionales, acicateada por las burguesías regionales separatistas que buscan debilitar al gobierno central. El objetivo de este trabajo es dilucidar la naturaleza social de las fuerzas enfrentadas y las estrategias que guían su accionar. Para esto, explicitaremos nuestro marco teórico, los observables y las fuentes a utilizar, para finalizar con una descripción de los principales enfrentamientos de los dos últimos años. Por último, compararemos las tendencias contradictorias que la sociedad boliviana posee en su interior, que determinan la crisis orgánica del capitalismo andino, para avanzar en una hipótesis sobre el futuro del proceso revolucionario.

1.1 Observables y fuentes

Intentaremos responder a nuestros interrogantes, en primer lugar, describiendo los encuentros recientes entre la fuerza social “oficialista” y la “oposición”. Luego nos acercaremos a la naturaleza de los campos enfrentados a partir del análisis de su composición social y de sus intereses materiales. A continuación, a la luz de los datos aportados, dilucidaremos la estrategia general que guía a cada uno de los oponentes, ponderando también la disputa programática (táctica y estratégica) al interior de los campos. La evolución de las variables económicas (niveles de recaudación, gasto y redistribución del Estado central, precios de los commodities en el mercado mundial, etc.) y políticas (resultado de los intentos por regimentar el proceso en cauces institucionales, como los referendums autonómicos y revocatorios), serán tenidos en cuenta a la hora de caracterizar la dirección del proceso. Las fuentes que utilizamos fueron diarios bolivianos de tirada nacional (*El Diario*, *La Razón*, *La Prensa*) y regionales (*La Palabra del Beni*, de Trinidad; *Correo del Sur*, de Sucre; *Los Tiempos* y *Opinión*, de Cochabamba; *La Patria*, de Oruro; *El Potosí*, de Potosí; *El Deber*, *El Mundo*, *El Nuevo Día*, *La Estrella de Oriente* y *El Norte*, de Santa Cruz de la Sierra; *El País*, *El Nuevo Sur* y *El Nacional*, de Tarija). Además trabajamos con declaraciones de los principales actores del proceso, de las organizaciones en lucha, con documentos oficiales y con sitios de noticias Internet (*Jornadanet.com*, *Econoticiabolivias.com*, *Agencia Boliviana de Información* y *bolpress.com*).

2. Los encuentros

La descripción detallada de la totalidad de encuentros llevados a cabo en la sociedad boliviana desde la llegada del MAS al poder requeriría de un espacio superior al de esta exposición. Por lo tanto, luego de realizar un sumarísimo resumen sobre los principales hechos del proceso insurreccional boliviano, nos concentraremos en los dos últimos años, resaltando los eventos centrales, es decir, aquellos que expresan el núcleo de los enfrentamientos.

2.1. De la “guerra del agua” a la asunción del MAS al poder

En enero de 2000 se produjeron protestas y bloqueos en Cochabamba contra las altas tarifas del servicio de agua.¹ La represión a los levantamientos en Potosí y Oruro produjo 33 muertos y seis heridos. Los cocaleros marcharon a La Paz. El 4 y 5 de febrero, la Coordinadora del Agua pidió la revisión del contrato con Aguas del Tunari, mientras que la Federación Departamental Cochabambina de Organizaciones de Regantes (Fedecor) se sumaba a las protestas exigiendo la anulación de la Ley 2029 de Servicio de Agua. Se firma el “Convenio por Cochabamba” que congela las tarifas del agua y promete revisar el contrato de la empresa cuestionada. En abril se produce la “guerra del agua”: ante la movilización popular, el gobierno dictamina el estado de sitio, que profundiza el enfrentamiento. Finalmente, Aguas del Tunari abandona el país y se modifica la Ley 2029. En septiembre se produce una nueva oleada de levantamientos: bloqueos de ruta con la participación de los cocaleros del Chapare y de los Yungas de Evo Morales, los trabajadores rurales, la Confederación Obrera Boliviana (COB) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) de Felipe Quispe. Se toma campos petroleros en Santa Cruz, Tarija y Sucre. En octubre, el ejército se ve obligado a replegarse, con excepción del Chapare. El gobierno firma acuerdos con los sectores movilizadas. Los combates dejan un saldo de 15 muertos, 265 heridos y 20 torturados.

En abril de 2001 se reinician las movilizaciones por la persistencia de los conflictos: una marcha de trabajadores rurales llega hasta La Paz. El 7 de junio, doce mil mineros, portando dinamita, ocupan la capital exigiendo la salida de las mineras imperialistas y el financiamiento para las cooperativas mineras. La movilización provoca la renuncia del Presidente Hugo Banzer y la asunción de Jorge “Tuto” Quiroga. Este hecho no detuvo a las masas que, en los meses siguientes, seguían cortando caminos exigiendo tierras, la condonación de las deudas, el cese de la represión, la desmilitarización del Altiplano y una mayor atención para los jubilados.

En marzo de 2002 se producen masivas movilizaciones contra las trasnacionales, en Cochabamba. En abril, más de 10.000 personas protestan contra el gobierno, en la ciudad de La Paz y, en mayo, organizaciones campesinas e indígenas se manifiestan contra la reforma de la Constitución y el paquete agrario, en Santa Cruz de la Sierra. El 30 de junio, las elecciones nacionales declaran como nuevo

¹ La cronología del acápite 2.1. está realizada en base a Coggiola, Osvaldo: *Rojo Amanecer*, Buenos Aires, Ediciones ryr, 2007 y “La Revolución Boliviana (2003-2006)”, Buenos Aires, Ediciones Prensa Obrera, septiembre de 2006.

presidente a Gonzalo Sánchez de Losada, del MNR, con el 22%. El MAS alcanza el 20%, colocando a Evo como diputado nacional. En diciembre, Evo presenta al gobierno, junto a dirigentes sociales, 15 demandas a cumplir.

En enero de 2003 nuevos bloqueos se producen en la ruta Cochabamba – Santa Cruz. Intentan detener el impuestazo al salario sancionado por el gobierno. El 12 y 13 de febrero militares y policías se enfrentan en la plaza central de La Paz, frente al Palacio de Gobierno. El Presidente saca francotiradores a las calles: 35 muertos y 205 heridos se suman a la larga lista de bolivianos caídos. El 19 de febrero, el gobierno anuncia el retiro del impuestazo. A mitad de año, el Día Nacional de la Defensa del Gas, se desarrollan manifestaciones contra el gobierno y su política hidrocarburífera. El 20 de septiembre el gobierno reprime los bloqueos campesinos, con 6 muertos como consecuencia. La Paz es bloqueada: no entran alimentos y los mercados cierran en solidaridad con los campesinos. Los obreros declaran la huelga general y marchan por la ciudad, a los que se le suman el paro de transportistas, la protesta de jubilados, los estudiantes universitarios y el inicio de una huelga de hambre de dirigentes campesinos, en la ciudad de El Alto. El 17 de octubre cae otro presidente: Sánchez de Lozada renuncia y asume su vice, Carlos Mesa.

En febrero de 2004 se promulga la Ley de Reformas Constitucionales, que introduce las figuras de la Asamblea Constituyente y el referendo para decidir el futuro del gas: el 80% vota por el “sí” a la nacionalización. En octubre, miles de campesinos marchan para reclamar el juicio a Sánchez de Lozada. El mismo mes, la Cámara de Diputados aprueba por unanimidad el proyecto de Ley de Hidrocarburos.

El 2005 comienza con movilizaciones, paros por tiempo indefinido y cortes de ruta contra el aumento en el precio del combustible, causado por la eliminación de los subsidios estatales. En marzo, el Presidente propone al Congreso anticipar las elecciones, pero éste lo rechaza. En abril y mayo, el Senado y el Congreso aprueban la reforma de la Ley de Hidrocarburos, que incluye un impuesto del 32% a la producción de las empresas extranjeras, sin embargo, el Presidente no promulga la ley y llama a un encuentro multisectorial para debatir una nueva reforma. Inmediatamente, decenas de miles de personas marchan en la Paz para exigir la nacionalización del petróleo y el gas natural, además de la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Las vías de acceso a La Paz son bloqueadas, provocando que, el 3 de junio, Mesa convoque a una Asamblea Constituyente y a un referendo sobre las autonomías regionales. El 6 del corriente, el proceso revolucionario boliviano derriba al tercer presidente elegido constitucionalmente: Carlos Mesa presenta su renuncia y asume el jefe de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez. En diciembre se realizan las elecciones presidenciales, resultando vencedor Evo Morales, con el 51% de los votos. La oposición, representada por “Tuto” Quiroga, no llega al 34%.

El MAS asume el 22 de enero de 2006. En marzo, el Congreso aprueba la convocatoria a la Asamblea Constituyente y, en mayo, Evo nacionaliza los hidrocarburos por decreto. En julio, el MAS obtiene el 53% de los votos para la Asamblea Constituyente, no llegando a los dos tercios necesarios para

imponer reformas constitucionales sin recurrir a acuerdos con la oposición. En el plebiscito por las autonomías regionales triunfa el “no” en la mayoría del país: el “sí” se impone en los estados de la “medialuna”, Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni.

2.2. De la “nacionalización” de los hidrocarburos a la nueva Constitución

El programa del MAS posee, desde su llegada al poder, dos grandes objetivos: sancionar una nueva Constitución y recuperar los recursos naturales de la Nación. A fines de 2006, el gobierno de Evo Morales motorizó la segunda de estas metas, a través de la firma de convenios con la Argentina, de venta de gas natural, junto a contratos de exploración y explotación de los hidrocarburos.² La firma de los contratos garantizó a las petroleras los mercados argentinos por más de 20 años.³ Evo intentó mostrar el hecho como un gran triunfo:

“ser presidente, ser gobierno es hacer buenos negocios para Bolivia y hemos empezado a hacer buenos negocios para Bolivia. (...) Este es el inicio de una integración energética de Latinoamérica, donde algunos tienen reservas y otros tienen la infraestructura industrial”.⁴

Bajo la consigna “queremos socios pero no dueños”, el Gobierno planteó: “Misión cumplida (...) estamos ejerciendo como bolivianos el derecho de propiedad sobre los recursos naturales. Sin expulsar a nadie ni confiscar. Esta es una nacionalización sin indemnización”.⁵

Sin embargo, los contratos expresan la aplicación de la Ley de Hidrocarburos 3058, que es sustancialmente diferente de la nacionalización prometida y demandada por los movimientos sociales que llevaron al MAS al poder. Estudios especializados explican que no se han suscripto contratos de Servicio, sino de Operación.⁶ Incluso Petrobras afirmó públicamente que los contratos firmados se tratan de Contratos de Producción Compartida, por los cuales cada compañía petrolera “ejecuta todas las operaciones petroleras por su cuenta y riesgo” y “recibe, directamente, una retribución definida en

² “Evo consolida la política neoliberal del gas. Radiografía de los nuevos contratos petroleros y la alianza estratégica de Morales con las transnacionales”, en www.econoticiasbolivia.com.

³ Arze, Carlos: “Nuevos Contratos de Hidrocarburos”, CEDLA, Noviembre de 2006 y La Razón, 4 de noviembre de 2006, La Paz.

⁴ Palabras pronunciada en el discurso de firma de contrato proyecto de construcción GNEA. “Hidrocarburos al día”, 19/12/2006, en Observatorio boliviano de industrias extractivas, www.cedla.org.

⁵ Declaraciones de Evo Morales. *La Prensa*, 30 de mayo de 2006. La Paz.

⁶ Un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) explica la diferencia entre un Contrato de Servicios y otro de Operación: “Un Contrato de Servicios es un acuerdo mediante el cual una compañía petrolera contrata a proveedores especializados para que efectúe trabajos en geociencias, ingeniería petrolera y otras materias. Este tipo de contratos no son convenios de exploración, por tal motivo no se le asignan bloques donde pudieran tener derechos exclusivos. En ningún caso un Contrato de Servicios adquiere la propiedad de los hidrocarburos, derechos de explotación o derechos de producción. Tampoco asume el riesgo geológico ni el de mercado, por ende no participa de las rentas económicas asociadas a la explotación del recurso natural. La retribución no está atada al establecimiento de la producción o a su volumen. El contrato dura el tiempo que exige la realización de la obra o la prestación de servicio que normalmente es menor a tres años”. Por el contrario, un Contrato de Operaciones señala que a la compañía petrolera se le otorgan concesiones que le dan el derecho de realizar actividades de exploración y explotación de forma exclusiva, asumiendo el riesgo geológico como de mercado. Aporta la totalidad de capitales, instalaciones, equipos, materiales, personal, tecnología y otros necesarios. La retribución se realiza con un porcentaje de la producción, en dinero o en especie, cubriendo la totalidad de sus costos de operación y utilidad. Rodríguez Padilla, Víctor. “Modalidades de Contratación Petrolera”, Facultad de Ingeniería, UNAM, 25 de mayo de 2006, citado en www.econoticiasbolivia.com.

función de la recuperación de costos, precios, volúmenes e inversiones”.⁷ La empresa asegura que “continúa con la propiedad de sus actuales activos”, que “las reservas pueden ser contabilizadas por Petrobrás” y que los nuevos contratos le garantizan una rentabilidad por encima del 15%, tasa de retorno superior a sus costos de capital, y el control de una posición estratégica -la operación en los campos San Alberto y San Antonio- para el abastecimiento de gas natural a Brasil. Además, cuando se realicen los negocios petroleros, la remuneración que le corresponde a la petrolera será depositada directamente por el comprador en cuentas de Petrobras, es decir, sin mediación de YPFB. Por último, la empresa brasileña asegura que no existen compromisos para que la compañía haga nuevas inversiones, excepto las habituales de manutención de la producción.⁸ Esta también es la posición de la petrolera británica BG Group.⁹ Otro de los elementos centrales de los contratos es que las exportaciones de la totalidad de las reservas probadas de gas natural del país se realizarán a Brasil y Argentina a la mitad del precio internacional. El Estado boliviano recibirá más ingresos con la legalización de los contratos petroleros, pero mucho menos que las transnacionales.¹⁰ Los contratos de exportación se firmaron sobre un valor de U\$S 4 a U\$S 5, cuando el precio internacional actual es de U\$S 8 promedio el millón de BTUs de gas (unidad térmica británica). El incentivo tributario beneficia, sobre todo, a las empresas que controlan el negocio de la exportación de gas a Argentina y Brasil (Repsol y Petrobras). Así, las petroleras que operan a ambos lados de la frontera, en el doble papel de vendedoras y compradoras, pagarán impuestos sobre un promedio de U\$S 5 por millón de BTUs, y no sobre U\$S 8.¹¹ Con ello, Bolivia renunció a la mitad de sus potenciales ingresos en beneficio directo de las transnacionales. De esta manera, los ingresos para el Estado boliviano provendrán casi en su totalidad por la exportación de 26 millones de metros cúbicos diarios de gas natural como materia prima al mercado argentino y de 27,7 millones al brasileño. Con relación al pasado, la participación del Estado en los beneficios de la explotación del gas como materia prima irá en aumento, tanto porque se duplicará la cantidad de gas a exportar, como por la nueva distribución de la renta petrolera y el aumento de la cotización internacional de los hidrocarburos. En esta nueva exportación de gas a Argentina, el gobierno boliviano aspira a quedarse con 17 mil millones de dólares de los 50 mil millones que moverá el negocio en los siguientes 20 años. Sin embargo, los ingresos brutos de las transnacionales también se acrecentarán por estos mismos factores, a los que se le suman los beneficios por llevar a cabo la industrialización del gas y su reventa luego del proceso productivo, tarea que la empresa estatal boliviana no realiza. Aunque las petroleras pagarán, en términos nominales, un 50% en regalías e impuestos en la mayor parte de los campos, Repsol, Petrobras, Total, British Petroleum, Pluspetrol, Vintage y Pan American, quedaron

⁷ *La Razón*, 1 de noviembre de 2006. La Paz.

⁸ *Opinión*, 7 de noviembre de 2006. Cochabamba.

⁹ *La Razón*, 3 de noviembre de 2006. La Paz.

¹⁰ “Gas: la mayor tajada queda con las petroleras”, en www.econoticiasbolivia.com.

¹¹ A pesar de este desfasaje, el dinero obtenido por el gobierno es superior a su antecesor, ya que el millón de BTU costaba 3 dólares antes de la nueva ley. Ver *Prensa Obrera*, 11 de mayo de 2006.

más que conformes.¹² Con la firma de estos contratos, Evo Morales promovió el incremento relativo de ingresos para el Estado como resultado de la intensificación de los volúmenes de exportación, en desmedro del mercado interno y la industrialización.

En noviembre de 2006, el Congreso aprobó la suscripción de los contratos petroleros junto a la Ley de Tierras, que agiliza los mecanismos para la reversión y distribución de tierras ociosas, aunque garantiza al mismo tiempo la permanencia de todos los latifundios que puedan demostrar que cumplen alguna función económica y social.¹³ Luego de su aprobación, las organizaciones de base del MAS mostraron su disconformidad con dicha ley, movilizándose para revocar la decisión del poder legislativo: en septiembre de 2007, la *Cumbre de organizaciones sociales de pueblos y naciones indígenas originarias campesinas y organizaciones populares de las ciudades*, con masiva presencia de dirigentes del MAS, aprobó una declaración que establece la necesidad urgente de “expropiación sin indemnización del latifundio y su distribución inmediata entre productores y del campo y la ciudad que estén dispuestos hacerla producir en beneficio de la sociedad”.¹⁴ Al mismo tiempo, la Confederación Obrera Boliviana (COB), también dirigida por sectores aliados al gobierno, lanzó un plan de lucha para recuperar el salario, en protesta contra el aumento de precios que afecta a la canasta familiar, organizando la “gran marcha nacional contra la inflación”.¹⁵ A un mes de las jornadas de lucha, el gobierno aprobó, con el apoyo de cuatro mil campesinos que cercaron el Congreso, una ley que transformó el origen del financiamiento de un beneficio anual y vitalicio para todos los mayores de 60 años: de pagarse con recursos del Estado central –de YPFB, más específicamente–, pasó a financiarse con recursos de los gobiernos regionales, es decir, con el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Mientras esto ocurría, la Asamblea Constituyente sesionaba en un recinto militar en Sucre, debido a los combates constantes entre grupos opositores y oficialistas con los asambleístas. Los enfrentamientos ocasionaron la muerte de tres civiles y más de 200 heridos, provocando el traslado de la Asamblea. El fracaso de la Constituyente se confirmó cuando, a pesar del acuerdo del gobierno y la oposición que garantizaba una Constitución consensuada, una fracción indigenista del MAS rompió el acuerdo de los dos tercios, determinando la profundización de los enfrentamientos por fuera de las instituciones: el 28 de noviembre de 2007 los gobiernos regionales opositores desarrollaron una huelga masiva en seis de las nueve regiones de Bolivia, que incluyó movilizaciones, golpizas a los grupos leales a Morales y acoso a los migrantes llegados del altiplano. Tras cumplir el paro, los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca anunciaron estar listos, como lo dijo el presidente del Comité Cívico cruceño, Branko Marinkovic, para “pasar al estado de resistencia civil movilizada ante el quiebre de la democracia”.¹⁶ Su lucha se profundizó en diciembre, cuando los prefectos, dirigentes

¹² “Bolivia: borrón y cuenta nueva con las petroleras”, en www.econoticiasbolivia.com.

¹³ “Evo logra legalizar los petrocontratos y la Ley de tierras”, en www.econoticiasbolivia.com.

¹⁴ “La rebelión de los 100 clanes”, en www.econoticiasbolivia.com.

¹⁵ “Más explotación laboral”, en www.econoticiasbolivia.com.

¹⁶ “En Bolivia hay dos gobiernos”, en www.econoticiasbolivia.com, 4/12/2007.

cívicos, empresariales y populares de los valles, el oriente y sur del país se declararon en virtual desacato, y comenzaron una huelga de hambre desde el 3 de diciembre, llamando a la resistencia civil – que incluyó la toma de oficinas públicas, el intento de controlar la policía y el desacato militar- a las medidas gubernamentales, además de viajar a Washington para denunciar la acción del gobierno. Al mismo tiempo, la Asamblea Constituyente finalizaba sus sesiones con la redacción de una nueva Constitución Política que aún hoy espera ser sometida a la aprobación popular. Sin embargo, los asambleístas, expresando la polarización de las fuerzas bolivianas, no pudieron acordar los límites a los latifundios, por lo que la futura consulta al pueblo deberá incluir esta cuestión.

2.3. Del fracaso de la Asamblea Constituyente a los referendums autonómicos

A pesar del ambicioso plan de lucha opositor, el inicio de 2008 mostró que “la medialuna” no contaba con el apoyo de la totalidad de su población: cientos de trabajadores rurales que protestaban en la norteña ciudad beniana de Guayaramerín, en contra del separatismo, fueron salvajemente golpeados por bandas fascistas, según denunció la dirigente agraria, Sonia Aguilera. Al mismo tiempo, se producían en Cochabamba violentos enfrentamientos entre grupos de choque organizados por el Comité Cívico y grupos indígenas. En Santa Cruz, el vicepresidente del Comité Cívico cruceño, Luis Núñez, planteó a los sectores oficialistas de sus regiones “abandonar Santa Cruz o, de lo contrario, atenerse a las consecuencias”.¹⁷ La fuerza de la oposición obligó a Morales a prometer la devolución de los 200 millones de dólares recortados a las regiones para los jubilados y la articulación de la nueva Constitución con los reclamos de autonomía regional. Sin embargo, las bases del MAS no le permitieron claudicar al Presidente: el mismo mes, la COB de Oruro emitió una declaración donde manifestó:

“Terminó el año 2007 y los avances del movimiento obrero y popular en su lucha por establecer otro sistema económico social en reemplazo del actual totalmente caduco y fracasado fueron mínimos. Se mantiene aún el modelo económico neoliberal que solo privilegia a un reducido sector minoritario de la sociedad, pero que cuenta con ingentes recursos económicos que le permiten seguir manejando los hilos de la política, la economía y la superestructura del país”.¹⁸

La agenda de lucha de las bases masistas tenía tres componentes fundamentales: 1) nacionalización de los recursos naturales (nacionalización y reversión de los yacimientos), 2) reversión de las empresas capitalizadas y 3) liquidación de las “leyes neoliberales”. A pesar de la presión popular, Evo no dejaba de enviar mensajes conciliadores: en marzo, luego del asesinato del Comandante de las FARC, Raúl Reyes, por parte del gobierno de Colombia, planteó que a su gobierno le importan tanto las buenas relaciones con Chávez y Correa, como aquéllas con Uribe y la monarquía española, además de alentar el desarme de las FARC.¹⁹

¹⁷ Agencia Boliviana de Información, 27/02/2008, en <http://abi.bo/>.

¹⁸ “Dos años de Evo y no cambia nada”, en www.econoticiasbolivia.com.

¹⁹ Ochoa Urioste, Mauricio: “Los otros amigos de Evo Morales”, en www.rebellion.org.

En abril, a 10 días del referéndum por la autonomía, el gobierno volvió a cargar sobre la oposición regional congelando las cuentas fiscales y suspendiendo los desembolsos de recursos hacia el departamento de Santa Cruz, entre los que se encuentra la coparticipación por los impuestos al gas. De inmediato, los cruceños se declararon en emergencia regional y denunciaron “otro golpe político” a la consulta del 4 de mayo, considerada “ilegal y separatista” por el oficialismo.²⁰ El 3 de abril, en la presentación de su programa de gobierno, el Prefecto de Santa Cruz respondió poniendo la demanda cruceña en la misma línea de las protestas del agro en Argentina. Los niveles de confrontación determinaron la intervención de la Iglesia que, el día 10, llamó "vehementemente" al diálogo, anticipando un escenario de confrontación violenta si los sectores enfrentados no abandonan sus posiciones radicales.

En mayo de 2008 comenzaron a realizarse los referéndums autonomistas en las ciudades del oriente, que tenían por objetivo consultar a la población su posición sobre profundizar el proceso secesionista.²¹ Si bien es difícil objetar el triunfo de la oposición, el alto abstencionismo muestra que el éxito no ha sido abrumador y que, al interior de “la medialuna”, existen numerosos sectores simpatizantes del MAS. En Pando, por ejemplo, sumando ausentismo y votos por el “NO”, un 64,7% habría apoyado al gobierno; en Beni, el mismo cálculo muestra que el 44,3% estaría en contra de la autonomía. Las jornadas electorales se caracterizaron por hechos violentos en varias regiones. En la localidad beniana de Yucumo -fronteriza con La Paz- los pobladores quemaron urnas y golpearon al subcalde en plena calle. También incendiaron el material electoral los campesinos de Filadelfia, en el departamento de Pando, que el sábado habían obligado a "renunciar" al diputado Fermín Terrazas, bajo la acusación de haber contratado matones brasileños para intimidarlos. En la capital beniana, Trinidad, jóvenes se enfrentaron con palos y piedras con mototaxistas y simpatizantes masistas, con la destrucción una moto y al menos dos heridos. Los grupos de choque -la Unión Juvenil Cruceñista- portaron palos, piedras y armas de fuego, agrediendo a quienes manifestaban su voto por el “NO” al estatuto autonómico. Los sectores afines al gobierno bloquearon algunos caminos, quemaron urnas y boletas de sufragio y también golpearon a algunos ciudadanos por considerarlos autonomistas. A pesar de estar plenamente identificados los participantes de los hechos de violencia el Estado no sancionó a ninguna de las dos partes.²² Mientras se desarrollaban los enfrentamientos, algunas fracciones de la fuerza opositora parecían intentar acaudillar una salida dialogada, como es el caso del presidente del Senado y empresario cruceño Oscar Ortiz, que sostuvo que “Bolivia necesita un pacto. El gobierno debe reconocer el voto popular (en los referendos autonomistas) y propiciar un acuerdo nacional que se

²⁰ La Nación, 4/05/2008, en www.lanacion.com.ar.

²¹ El estatuto autonómico de Santa Cruz incluye 43 competencias locales exclusivas. Entre las más conflictivas está el manejo de la tierra de esta rica región agroindustrial sin injerencia del Estado central, lo que es denunciado por el gobierno como un intento de frenar la reforma agraria en marcha. Los cruceños también quieren cobrar los impuestos a las petroleras. Si bien la mayor parte de las reservas de gas están en Tarija, las empresas residen en Santa Cruz, con más servicios y conexiones al exterior. El prefecto/gobernador de Santa Cruz creó el Consejo Departamental de Comercio Exterior y Exportaciones, que busca revertir las restricciones gubernamentales a la exportación de aceite.

²² [Baspineiro](http://www.rebellion.org), Alex Contreras: "Referenditis aguda", en www.rebellion.org.

refleje en una nueva Constitución”. Ortiz reconoció que sin ello los estatutos autonómicos son inaplicables.²³ Al mismo tiempo, el prefecto Costas pedía al sector agroindustrial acatar “coyunturalmente” las normas emitidas por el Gobierno de Evo (abastecer primero al mercado interno) para exportar aceite de soja y girasol refinado y crudo. Hasta ahora, sólo la empresa ADM-SAO, de la estadounidense Archer Daniels Midland, cumplía con esto y era autorizada a exportar. Sin embargo, las otras dos grandes empresas productoras de aceites, Fino del Grupo Romero del Perú y Rico de la Industria de Oleaginosas Sociedad Anónima (IOL.SA), propiedad de Branco Marinkovic, se resistían a cumplir y exigían que, en el marco de la autonomía, Costas les autorice a exportar. Marinkovic encabezaba la línea más radical, que planteaba que el gobierno, desde el triunfo de los estatutos autonómicos, no debería tener más relación con los sectores productivos, sino que debería dirigirse por intermedio del gobierno departamental, como sostuvo el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Mauricio Roca. En la misma línea, el asesor de Hidrocarburos y Minería de la Prefectura de Santa Cruz, Juan Padilla, planteó que

“ya no se permitirá que las regalías petroleras sean enviadas a la administración central ubicada en La Paz y que la región cobrará directamente a las empresas por la explotación del gas y petróleo en el territorio de Santa Cruz (...) Antes, el gobierno central recibía las regalías petroleras y luego las distribuía a los departamentos. Ahora, vamos a hacer a la inversa, primero las recibirá el departamento que genera los recursos y luego se pasarán a la administración central (...) Las regalías, por derecho, son un tema netamente de los departamentos productores. Esa plata se queda en Santa Cruz”.²⁴

2.4. Del referéndum autonómico al revocatorio

En mayo, la escalada de enfrentamientos se disparó, fracturando incluso a la dirección de la fuerza opositora: Cordillera, la provincia más grande del departamento de Santa Cruz, rechazó el referéndum autonomista porque “pone en peligro la unidad de la nación boliviana”. La dirigencia planteó no sentirse representada ni por el “indigenismo” ni por el “autonomismo”, rechazando tanto la nueva constitución como los referéndums autonómicos, debido a que ambos seguirían entregando a las transnacionales el control de los recursos nacionales.²⁵

El mismo mes, en la capital del Beni, en Trinidad, paramilitares dependientes de la prefectura atacaron a periodistas de la radio gubernamental *Patria Nueva*. También en mayo se produjeron uno de los enfrentamientos más violentos de los últimos años, por los que Evo debió suspender su visita a Sucre. Allí, con el objetivo de impedir la llegada de Morales, la oposición agredió a unos 50 trabajadores

²³ Stefanoni, Pablo: “Avanza el separatismo cruceño”, en www.rebellion.org.

²⁴ “La oligarquía da un paso atrás y tres adelante”, en www.rebellion.org.

²⁵ “Cordillera y Camiri se declaran en provincia rebelde y autónoma, con la firme decisión de no permitir que las logias cruceñas impongan ni medio artículo de sus estatutos a partir del 4 mayo, elaboradas por cuatro logieros sin la participación de las provincias”, aseveró el asesor de los cívicos camireños, Mirko Orgáz García. “Para garantizar el desarrollo de la región y de Bolivia y evitar continúe el saqueo de nuestros recursos hidrocarburíferos, en el marco de nuestra autonomía provincial y en cumplimiento de las resoluciones del Cabildo, ratificamos la decisión de expulsar a las empresas transnacionales de la provincia Cordillera, en especial a la Andina – Repsol YPF, que a pesar de haber incumplido los contratos y robar al Estado boliviano, sigue operando los campos Camiri y Guairuy con la venia del gobierno”. Ver voto resolutivo del Comité Cívico de Camiri, Provincia Cordillera, ASC-Noticias, 2/5/08.

rurales gritandoles “¡De rodillas indios de mierda!”, mientras los obligaban a desnudarse y arrodillarse en la plaza principal. Incluso el Alcalde de Mojocoya fue forzado a quemar la bandera del MAS y la Wiphala (símbolo de las naciones originarias) bajo los aplausos del presidente del Concejo Municipal y con la ausencia de la policía y el Ejército, que no pudieron intervenir porque una multitud los obligó a replegarse en sus cuarteles.²⁶ Ante estos ataques, la Federación de Campesinos declaró una huelga de hambre de sus dirigentes y el inicio de un bloqueo de caminos, cercando la ciudad, con el objetivo de iniciar un bloqueo escalonado de carreteras que provoque la renuncia de la alcaldesa de Sucre, Aydé Nava, del presidente del Comité Interinstitucional, Jaime Barrón, y del presidente del Comité Cívico, Jhonn Cava, responsables de la agresión. Esta medida fue, sin embargo, desautorizada por el gobierno de Morales, que instruyó el repliegue de los efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Mostrando su impotencia, el gobierno central se limitó a expresar sus condolencias con los agredidos. Ante este ataque, la COB responsabilizó a “grupos pagados por los oligarcas y latifundistas de Sucre y la media luna”, advirtiendo

“que de continuar este salvajismo fascista los mineros marcharemos en defensa de nuestros hermanos de clase para castigar a los culpables de estos atropellos que se vienen haciendo costumbre en Sucre y los departamentos donde controlan las bandas fascistas de adinerados extranjeros (...) La represión cobarde desatada por los grupos fascistas de Sucre contra compañeros campesinos es una nueva provocación a las mayorías nacionales y a la clase trabajadora que está cansada de estos atropellos y abusos humillantes organizados y financiados por la oligarquía transnacional y latifundista que conspira abiertamente contra el orden establecido promoviendo el desacato sistemático a las leyes de la República”.²⁷

Sin embargo, también se observan diferencias en el campo oficialista: a fines de mayo, la dirección oficialista de la Central Obrera Boliviana (COB) suspendió en las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro y Potosí, las marchas de protesta convocadas para condenar la escalada opositora y exigir al Presidente que cumpla con las demandas populares de tierra, trabajo, pan y más salario.²⁸ Incluso el propio Morales instruyó a los dirigentes de Chuquisaca la suspensión de un bloqueo de caminos y un cerco sobre la ciudad de Sucre que estaba siendo organizado por organizaciones indígenas.

La oposición centró sus demandas en siete condiciones para iniciar el diálogo: corregir la nueva Constitución, devolver a las prefecturas los recursos del IDH, reconocer la validez de los referendos sobre estatutos autonómicos, permitir la participación de la Iglesia católica, países amigos y dirigentes regionales en el diálogo, suspender las prohibiciones a las exportaciones agroindustriales, y diseñar un plan nacional para enfrentar a la inflación. El vicepresidente profundizó la estrategia dialoguista del gobierno al aceptar algunas de las condiciones impuestas: aquellas que tienen que ver con el ámbito de competencias del Congreso, trabajar por una verdadera Constitución pactada, evaluar los procedimientos prácticos para facilitar la representación de todos los sectores y la participación de la Iglesia y representantes de países amigos. Mientras, Santa Cruz profundizaba sus intentos separatistas

²⁶ “Fascismo racista en Bolivia”, en www.rebelión.org.

²⁷ “La COB va a la huelga desde el 16”, en www.econoticiasbolivia.com, 04/06/2008.

²⁸ “Evo frena a la izquierda y da más alas al fascismo”, en www.econoticiasbolivia.com.

constituyendo el Consejo Departamental -hasta ahora con funciones de fiscalización- en Asamblea Legislativa Provisional y cambiando el cargo del prefecto, Rubén Costas, en gobernador: el cartel de “prefectura departamental” fue reemplazado por el de “gobierno autónomo de Santa Cruz”.

Ante los hechos de violencia de Sucre, el avance de las autonomías y la tibieza del gobierno, la COB decretó una huelga general indefinida el 16 de junio, que incluyó movilizaciones y bloqueos de caminos a nivel nacional, con el objetivo de “frenar la rebelión de la oligarquía y obligar al presidente Evo Morales a cumplir con sus promesas de acabar con el neoliberalismo, profundizar las reformas y mejorar la calidad de vida de la población”, es decir, cumplir con la “Agenda de Octubre”, que postula la expropiación y pase al Estado de las empresas transnacionales del gas, petróleo y minerales, la expropiación de los latifundios y la entrega de tierras para los campesinos, el aumento general de sueldos y salarios, el control de precios de los alimentos y la aprobación de una nueva ley de pensiones. Esto fue anunciado, desde la Central Obrera de Oruro, por el minero Jaime Solares, dirigente de los levantamientos populares de 2003 y 2005. El programa defendido por los mineros plantea que la

“lucha debe ir dirigida a arrebatar la fuente del poder económico de esta minoría oligárquica y latifundista. Eso significa luchar por el cumplimiento de las Agendas de 2003 y 2005, nacionalizando las empresas transnacionales y recuperando las empresas capitalizadas. Así herimos de muerte a los gamonales, frenamos el saqueo, generamos fuentes de trabajo y superamos, en los hechos, la pobreza ancestral a la que nos ha sometido el capitalismo y neoliberalismo”.²⁹

Las críticas de la COB se concentraron en exigirle a Evo que abandone su política conciliadora y que el Estado administre a las empresas por medio de un control social.

Ante esta escalada, tanto el gobierno como un sector de la oposición acordaron el llamado a un referendo revocatorio para los cargos de presidente, vicepresidente y para todos los prefectos. Sin embargo, los sectores más radicales de ambas fuerzas consideraban que la votación tan sólo ratificaría una situación de hecho y no resolvería la crisis política. Por ello, las bases del MAS creían urgente retomar la movilización y la lucha para recuperar el control de las calles y así evitar que la “oligarquía” afiance más su poderío. Ante la escalada de violencia de principios de 2008, el gobierno y sectores de la oposición acordaron el llamado a un referendo revocatorio que buscaba ratificar constitucionalmente la relación de fuerza entre los contendientes, poniéndole un coto a los enfrentamientos por fuera del Parlamento. A pesar de este objetivo encubierto, la nota de la elección fue el descomunal apoyo recibido por Morales. Su ratificación, con el 67,4% de votos (14% más que en 2005) y la destitución de dos prefectos opositores, expresaron el apoyo de las masas. Lejos de los intentos oficiales, el resultado de la jornada electoral potenció los antagonismos.³⁰

2.5. Del referéndum revocatorio a la masacre de Pando

²⁹ “La COB va a la huelga desde el 16”, en www.econoticiasbolivia.com.

³⁰ *La Prensa*, de La Paz, 10/08/2008, en <http://www.laprensa.com.bo/>

A pesar de que las fuerzas enfrentadas consolidaron su posición y de los numerosos llamados al “diálogo”, luego de la jornada electoral se potenciaron los antagonismos. Mientras las bases del MAS reclamaron “mano dura”, la oposición endureció su postura.³¹ El 11 de agosto, a pesar del llamado de Evo y la Iglesia al trabajo conjunto, la respuesta de las prefecturas fue unánime: nada se negociará si antes el Ejecutivo no devuelve el IDH. Además, aseguraron que las regiones profundizarán el camino del autonomismo a través de la elección de legisladores propios y de la formación de una fuerza de seguridad que garantice el cumplimiento de los estatutos autonómicos votados en los referéndums. Mientras, los sectores sociales afines al MAS se movilizaban para dar vía libre al plebiscito por la tierra y la consulta sobre el nuevo texto constitucional.: “No puede seguir postergando digan lo que digan, por lo tanto, máximo en tres meses después debe aprobarse la nueva Constitución”, manifestó el dirigente cocalero, Julio Salazar, e indicó que el Gobierno debe privilegiar las dos consultas.³² El 14 de agosto, la oposición instaló piquetes de huelga de hambre para presionar al gobierno y el 15 rompieron la mesa de diálogo, declarando un paro cívico con movilizaciones para el 19 y amenazando con la toma de oficinas públicas. Otro de sus objetivos era retrasar la elección de los prefectos que reemplazan a los revocados, aunque el eje del debate continuaba girando en torno al origen del financiamiento del beneficio mensual para los mayores de 60 años.³³ Por otro lado, las bases del MAS comenzaron a enumerar a sus enemigos en el gobierno: el dirigente de la Federación de Campesinos de La Paz, Remigio Figueroa, planteó que los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de Desarrollo Rural, Susana Rivero, y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti “no velan por el interés del pueblo, sino de un grupo de personas que nosotros no conocemos”.³⁴ El 18 de agosto, el Ejecutivo ordenó reforzar la custodia de las instituciones públicas con la Policía Militar, en previsión de posibles tomas el día de la protesta opositora. Pese a las medidas, el 19 de agosto, la Unión Juvenil Tarijeña (UJT) tomó las oficinas de la Agencia Regional de la Aduana, en Tarija. El dirigente de la UJT, Sergio Rales, planteó que la toma “pacífica” forma parte de las reivindicaciones por el IDH y para consolidar las autonomías departamentales: “Es para que la Aduana dependa de la Prefectura de Tarija”.³⁵ El día del paro, en Santa Cruz, se registraron enfrentamientos entre la Juventud Cruceña y la Juventud Popular, con un saldo de 15 heridos. Mientras el gobierno renovaba los llamados al diálogo, Beni, Pando y Santa Cruz decidieron bloquear las rutas desde el día 20, jornada en que los ganaderos de Beni y Santa Cruz cortaron el suministro de carne a La Paz. El 21 de agosto, continuaron las tomas: unos 150 integrantes de la Unión Juvenil Beniana (UJB) y el Comité Cívico Juvenil tomaron

³¹ *La Prensa*, de La Paz, 10/08/2008, en <http://www.laprensa.com.bo/>

³² La Asamblea dio por finalizado su labor con la aprobación de un texto constitucional el 9 de diciembre de 2007. Pero dejó pendiente la redacción del artículo referido a la extensión del latifundio, trabajo que delegó al Ejecutivo que debe convocar a un referéndum para que la población decida la superficie máxima de la propiedad rural. *La Prensa*, de La Paz, 12/08/2008, en <http://www.laprensa.com.bo/>

³³ Los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca demandan la devolución de 166 millones de dólares que fueron descontados por el Gobierno para pagar la Renta Dignidad y para la redistribución de la renta petrolera.

³⁴ *La Prensa*, de La Paz, 17/08/2008, en <http://www.laprensa.com.bo/>

³⁵ www.bolivianpress.com, 19/08/2008.

el Servicio Departamental de Educación (Seduca), en Trinidad, demandando que la institución pase a la administración de la Prefectura. Ante estos hechos, Evo llamó al Ejército a defender la unidad nacional. El llamado fue levantado por la Federación Única de Trabajadores y Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch), que el 22 devolvió el ataque opositor con el bloqueo de todos los accesos a Sucre, logrando su aislamiento. A través de cabildos y ampliados, la Federación eligió subprefectos, a los que buscó imponer por medio de la movilización.

El 24 de agosto, el gobierno redistribuyó por decreto el fruto del IDH, provocando la reacción de la oposición, que esperaba decidir sobre su destino y solicitó a las organizaciones realizar una cruzada de encuentros departamentales que garantice el triunfo del “SI” a favor del proyecto constitucional, solicitando además que le ayuden a “administrar el 67% de votos”.³⁶ Los días siguientes se profundizaron los cortes de rutas opositores que, a los bloqueos de los caminos a Paraguay y Argentina, le sumaron los de Chuquisaca, Potosí, Santa Cruz y Brasil. Sin embargo, el frente secesionista mostró algunas diferencias cuando, el 25, la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni) suspendió la prohibición de mandar carne al occidente del país, después de que sus afiliados perdieran en siete días de paro alrededor de un millón de dólares. El 27, la oposición tomó el 90% de los peajes de rutas, impidiendo el cobro a los pasajeros y el 28, los prefectos de “la medialuna” anunciaron que boicotearán cualquier consulta sobre la nueva Constitución y sobre la Ley de Tierras. A pesar de la amenaza, la presión del Consejo Nacional por el Cambio (Canalcam), formado por organizaciones de base masistas, dio sus frutos: el gobierno llamó a un referendo nacional para ratificar la Carta Magna aprobada por la Constituyente y dirimir la extensión del latifundio para el 7 de diciembre de 2008. En la misma fecha se deberá elegir a los prefectos de La Paz y Cochabamba, y a subprefectos y consejeros departamentales. Inmediatamente, los prefectos y cívicos del oriente manifestaron que la convocatoria es ilegal e inconstitucional. El 30 de agosto, cuando sectores oficialistas se aprestaban a ingresar en la plaza principal de Santa Cruz para festejar el decreto gubernamental, grupos opositores los atacaron a golpes: “No lo vamos a permitir (el ingreso de los masistas) a la plaza. Cuando nosotros vamos a sus pueblos, nos tratan como a perros. Queremos la independencia, no queremos a esta raza maldita en nuestra tierra”, planteó un dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista.³⁷ Pese a los niveles de violencia, ni la Policía Departamental ni la Guardia Municipal intervinieron en ningún momento. Ese mismo día, la oposición puso en marcha un plan para detener las consultas por medios judiciales. Al otro día, la Corte Nacional Electoral (CNE) no aprobó el decreto y pidió que se convoque a ambas consultas por ley congresal. Pero también ordenó detener la elección de assembleístas (convocadas para enero de 2009) en las regiones autonomistas.

El 1 de septiembre, los cívicos del Chaco bloquearon el acceso al campo hidrocarburífero San Alberto, el productor de gas más grande de toda Bolivia, explotado por Petrobrás. El 2, fue tomada una oficina

³⁶ *El Diario*, 27/08/2008, en www.eldiario.net/.

³⁷ *La Prensa*, de La Paz, 30/08/2008, en <http://www.laprensa.com.bo/>.

dependiente de la agencia USAID, hecho que el gobierno justificó. La agencia de cooperación de Estados Unidos ya había sido expulsada de Cochabamba el 25 de junio porque, según los productores de coca, conspiraba contra el gobierno. Ante este escenario, el 4 de septiembre, los miembros del Consejo Nacional Democrático (Conalde) de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca, Cochabamba y Tarija, resolvieron:

“1) Masificar el bloqueo de carreteras en los cinco departamentos del oriente y sur del país en adhesión a las medidas de presión realizadas en el Chaco para la restitución del IDH y la defensa de las regalías, que constituyen derechos históricos de nuestros pueblos y la base material para implementar las autonomías departamentales; a la vez de alertar que, en caso de persistir la política confiscatoria del Gobierno central, no nos responsabilizamos de cualquier acción que impida el suministro de hidrocarburos al exterior del país; 2) Rechazar e impedir el propósito del Gobierno central de imponer un texto de reforma constitucional que carece de toda legalidad y legitimidad y que fue escrito con la sangre de hermanos bolivianos en cuarteles y fuera de la sede legal de la Asamblea Constituyente (Sucre), por lo que nos ratificamos en la decisión de no permitir la realización de ningún referéndum constitucional que apruebe ese proyecto en nuestros departamentos; 3) Ratificar nuestra decisión de profundizar la implementación de los estatutos autonómicos aprobados por nuestros pueblos. Al mismo tiempo, aplaudir y apoyar la firme determinación de Chuquisaca de convocar al referéndum por la autonomía departamental; 4) Denunciar al pueblo boliviano la persecución política del Gobierno central a las autoridades departamentales y los dirigentes cívicos, con juicios sin basamento legal alguno; 5) Convocar a los ciudadanos, las organizaciones y las instituciones democráticas del país, sin distinción de raza, posición política o religiosa, a conformar un frente amplio en defensa de la democracia, que trabaje por la pacificación nacional y la recuperación plena de la democracia”.³⁸

Para el 5 de septiembre, la oposición ya dominaba en Pando cinco instituciones estatales (el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Superintendencia Forestal, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), las oficinas de Migración en la ciudad fronteriza de Cobija y la Aduana Nacional), mientras que, en Tarija, los universitarios tomaron la oficina del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Evo denunció que detrás de estas ocupaciones existía un intento de dar un “golpe civil”. Para el 6 de septiembre, las tomas, asedios a campos petroleros y bloqueos fronterizos impidieron el normal abastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP) y diesel en Bolivia, lo que puso al país al borde de la crisis energética. El mismo día, las tomas de instituciones públicas ya habían llegado a once a lo largo de toda “la medialuna”. En Cobija, tres oficiales del Ejército fueron tomados como rehenes por cívicos y funcionarios regionales cuando se disponían a abastecer de gas lacrimógeno a las fuerzas estatales que custodiaban las entidades públicas. El 8 de septiembre comenzaron a desarrollarse enfrentamientos entre los viajeros y quienes bloqueaban los caminos, como sucedió en San Carlos. El 9 de septiembre, se produjo en Santa Cruz un violento levantamiento opositor que finalizó desplazando a las fuerzas de seguridad y con el copamiento de 22 entidades estatales.³⁹ Los enfrentamientos en Santa Cruz y Tarija

³⁸ www.bolivia.com, 3/09/2008.

³⁹ Fueron tomadas las oficinas del INRA, Entel, Impuestos, Graco, Caja Nacional de Salud, Yacimientos, Terminal Bimodal, Seduca, Dirección de Trabajo, Superintendencia Forestal, Almacenes Bolivianos y las oficinas distritales de Migración y la Aduana en las provincias. En Cobija corren la misma suerte la Aduana, INRA, ABC, Impuestos, Superintendencia Forestal y el Aeropuerto. En Beni continúan invadidas las instalaciones del Aeropuerto, AASANA,

continuaron al otro día, dejando un saldo de 97 heridos. La oposición avanzó sobre otras 14 instituciones estatales. Los combates incluyeron a productores rurales de la zona, que enfrentaron la estrategia separatista. Evo Morales reaccionó expulsando al embajador norteamericano, Philip Goldberg, a quien acusó de entrometerse en la política interna, fomentando la división nacional. El 11 de septiembre los combates alcanzarán niveles inéditos: en la ciudad de El Porvenir, en Pando, un grupo de sicarios llevó adelante una masacre contra trabajadores rurales y mujeres dejando un saldo de 25 muertos y 106 desaparecidos.⁴⁰ El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, aseguró que los campesinos fueron emboscados por personal de la prefectura.⁴¹ Los agresores no perdonaron ni a mujeres embarazadas ni a niños, que fueron arrojados al río Tahuamanu luego de ser asesinados.⁴² Las víctimas plantearon que, cuando la Prefectura comenzó el ataque, la Policía no sólo no intervino, sino que huyó. Luego de los hechos, Evo declaró el estado de sitio en Pando y retomó el control del aeropuerto a través de las fuerzas armadas, provocando un saldo de dos muertos. El prefecto llamó a la población a desobedecer el estado de sitio, lo que llevó a enfrentamientos armados entre el ejército y fuerzas irregulares, el 13 de septiembre. Al salir a la luz la magnitud de la masacre, gobierno y oposición volcieron a mostrar voluntad de encontrar una salida “negociada” a través del “diálogo”.

2.6. El GAN: un diálogo muerto antes de nacer

Luego de la masacre, Evo declaró el estado de sitio en Pando, retomó el control del aeropuerto a través de las fuerzas armadas y procesó al Prefecto de Pando. A pesar de esos primeros pasos que parecían avanzar con más determinación sobre la derecha, inmediatamente convocó a un “Gran Acuerdo Nacional”. El “diálogo político” incluyó los cambios constitucionales, en particular la demanda de autonomías departamentales y la redistribución del impuesto a los hidrocarburos.⁴³ El 5 de octubre, “técnicos” del gobierno y la oposición presentaron un documento que planteaba una propuesta de ajustes a la Constitución Política votada en Sucre, a fines de 2007.⁴⁴ Al otro día, los prefectos opositores aseguraron que no firmarán ningún acuerdo con el gobierno ni aceptarán el referéndum en sus regiones.⁴⁵ A pesar de la negativa, desde el 8 de octubre se retomó el diálogo legislativo con una serie de críticas opositoras a la Constitución oficialista: 1) al artículo 1 (que constituye a Bolivia en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías) por caracterizar que borra la Nación y la nacionalidad boliviana; 2) la elección por voto directo de las autoridades del Poder Judicial, aludiendo

Depósitos de Combustible y hay tomas de Ecobol, Entel, Migración y el Aeropuerto de Riberalta. En Guayaramerín, la Aduana y el Aeropuerto. En Tarija: Digecco, INRA, Impuestos, Superintendencia de Hidrocarburos, Migración, Aduana. También hubieron asaltos de entidades en Yacuiba y Villamontes. En Sucre permanecen ocupadas Impuestos y Entel.

⁴⁰ <http://bolivia.indymedia.org/node/19335>.

⁴¹ <http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=89754>.

⁴² <http://www.losandes.com.ar/notas/2008/9/13/un-380715.asp>.

⁴³ *La Tercera*, 15/09/2008, en www.tercera.com.

⁴⁴ Informe Diálogo Nacional: *Mesa Autonomías y Constitución Política del Estado*, Cochabamba, 5 de octubre de 2008.

⁴⁵ “Nuevo golpe fascista contra Evo”, en www.econoticiasbolivia.com.

su probable politización; 3) la creación de una justicia comunitaria con igual jerarquía que la ordinaria y la imposibilidad de revisar sus decisiones; 4) el mandato presidencial de 5 años con una posibilidad de reelección; 5) la consulta a los pueblos indígenas para explotar los recursos naturales no renovables existentes en el territorio que habitan y la declaración de los recursos naturales e hidrocarburos como propiedad de los bolivianos; 6) el artículo 108, que plantea que “la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad”, por considerar que vulnera la libertad de expresión; 7) la obligatoriedad de que los funcionarios deberán hablar, obligatoriamente, el español y una lengua originaria, lo que plantean como discriminatorio.⁴⁶

Es evidente que los puntos críticos son la reelección de Evo (que estaría habilitado a gobernar por 10 años más) y la propiedad de los recursos naturales. Al respecto, el MAS intentó calmar las aguas: el senador Félix Rojas aclaró, sobre la propiedad de los recursos, que sólo buscan garantizar que pertenecen al Estado boliviano y que no serán vendidos. Con respecto a la propiedad de la tierra, el MAS insiste en llamar a un referendo que dirima su extensión, que el proyecto constitucional plantea limitar en 5.000 ó 10.000 hectáreas.⁴⁷ A pesar de que ya han pasado varias jornadas de debate, sólo se avanzó en un acuerdo: el MAS concedió la incorporación de los términos “nación” y “república”.

Anticipándose a un eventual fracaso del diálogo, las regiones opositoras ya preparan la resistencia. El director de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, anunció el 10 de octubre la conformación de un frente amplio de defensa de la democracia, que planifique la movilización social para rechazar la propuesta oficialista.⁴⁸ Evo respondió organizando una marcha que, luego de recorrer 200 kilómetros, arribará a La Paz el lunes 20 de octubre, con la participación de unas 140 organizaciones, como la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), las 9 federaciones departamentales y al menos 20 regionales campesinas, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y la Central Obrera Boliviana (Cob).⁴⁹ “¡La derecha no pasará!”, “¡Bolivia libre sí, colonia yanqui no!” y “¡Patria o muerte, venceremos!” son las principales consignas esgrimidas. Mientras, la oposición volvió a azuzar el fantasma de la insurrección, manifestando que el gobierno pone en riesgo el proceso de diálogo. El presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Ortiz (Podemos), planteó que “lo que suceda en la sede de gobierno con la llegada de los marchistas será culpa del Presidente”.⁵⁰

⁴⁶La oposición no acordó un documento conjunto, por lo que cada Partido presentó sus críticas en forma independiente. *La Razón*, 10/10/2008, en www.la-razon.com.

⁴⁷*La Razón*, 12/10/2008, en www.la-razon.com.

⁴⁸Idem, 10/10/2008, en www.la-razon.com.

⁴⁹“Miles marchan por la ley de Evo”, en www.econoticiasbolivia.com.

⁵⁰*La Razón*, 14/10/2008, en www.la-razon.com.

4. Conclusiones

A ocho años del inicio del proceso insurreccional, y a casi tres años de la llegada del MAS al poder, Bolivia se encuentra partida en dos. Existen, de facto, dos gobiernos: el de Evo, que controla el altiplano (La Paz, Oruro y Potosí) apoyado por las masas urbanas y rurales, sectores sindicales y de la clase media, el ejército y la policía; y el de las burguesías regionales que, aunque aún no han podido formar un estado mayor, cuenta con la adhesión militante de amplios sectores pequeños burgueses y con la sumisión de algunos sindicatos y organizaciones cívicas y populares, dominando seis de las diez ciudades principales del oriente y sur del país.

La crisis es la expresión más acabada de un proceso de disolución de la burguesía nacional boliviana que se ve obligadas a acotar los espacios donde pretenden ejercer su dominación de clase ante la incapacidad de sostener regiones más allá de las viables económicamente. La disputa por el control de la renta de hidrocarburos y la tierra son los ejes en los que se expresan las contradicciones entre las fracciones burguesas que sostienen al poder central y las que poseen un proyecto autonomista. Ante este empate hegemónico, la llave la tienen las masas. La estrategia conciliadora del MAS ha producido la desorientación en las organizaciones de la clase obrera. A su vez, la “medialuna” avanza en sus niveles de organización y en la formación de alianzas, reforzando su disputa por los recursos y alineando bajo su proyecto a más capas sociales.

Este empate tiene como fundamento el escaso desarrollo de una fracción revolucionaria que se imponga la tarea de acaudillar el proceso. Los enfrentamientos no han podido canalizarse por la vía parlamentaria porque la vida política del gobierno no se encuentra atada a la “calidad institucional” de la democracia boliviana, sino a la su capacidad del Estado central de apropiarse de mayores tajadas de la renta para mantener a flote ciertas demandas de reforma. Sin embargo, la lucha de clases en Bolivia ha llegado a una encrucijada en la que no parece haber salidas de compromiso: o se liquida el proceso revolucionario o se profundiza el camino al socialismo.

En los últimos tres meses, Bolivia pasó de un referendo revocatorio que intentó detener una escalada de enfrentamientos, a una nueva masacre pertrechada por la derecha. Este hecho profundizó el impasse que vive el proceso revolucionario. Evo volvió a detener la acción directa de las masas para llamar a un nuevo “Gran Acuerdo Nacional”, con el objetivo de pactar con la derecha la institucionalización de su “capitalismo andino”.

El proceso boliviano parece repetir un ciclo sin final a la vista: el gobierno intenta apropiarse de mayores tajadas de la renta de hidrocarburos, la derecha resiste, el MAS llama al diálogo, la oposición pasa a la ofensiva y a la acción directa, las masas responden de la misma manera, la medialuna es derrotada en las calles, pero un nuevo llamado del gobierno al diálogo vuelve a intentar “congelar” la situación. Evo actúa de esta manera porque él mismo es la expresión política de este impasse del proceso: tanto la profundización de la revolución socialista, como una restauración contrarrevolucionaria deberán prescindir de su figura. A pesar de sus esfuerzos por institucionalizar los

enfrentamientos, todo parece demostrar que nuevos huracanes acecharán Bolivia. Tormentas que se volverán más dramáticas al compás de la agudización de la crisis mundial: la caída de los precios de los principales commodities exportables (zinc, plata, oro, estaño, plomo, cobre, gas, petróleo, soja, girasol, sorgo y maíz)⁵¹ profundizará los combates, no sólo por el destino de la renta, sino también por el trabajo y los salarios.⁵² En estos momentos, la derecha muestra una mayor fuerza subjetiva que la izquierda: mayor cohesión, una organización más centralizada y un programa más claro. A nivel de las clases, la burguesía cuenta con claras ventajas sobre la clase obrera, pues tiene a mano dos cartas: el bonapartismo masista y la reacción de la derecha. En el campo de la clase obrera, por el contrario, el autonomismo y diversas formas de indigenismo mantienen a los trabajadores a merced de su enemigo de clase.

⁵¹Ver *Agencia Bolivariana de Noticias*, 13/10/2008, en <http://abi.bo> y *Los Tiempos*, 13/10/2008, en www.lostiempos.com.

⁵²“Habrá desocupación y baja en los salarios”, planteó Teófilo Caballero, Presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz. *La Razón*, 13/10/2008, en www.la-razon.com.